

: El proyecto hegemónico neoliberal en Nicaragua durante la década de 1990

Manuel Yañez*

Resumen

A pesar de que es posible rastrear sus orígenes en las décadas de 1970 y 1980, es durante los años de 1990 que a nivel latinoamericano se produce el afianzamiento del proyecto hegemónico neoliberal. Dicho proyecto encarnó en el impulso de determinadas políticas de reformas en los planos económico, social y político. Al mismo tiempo, en un plano más general, se pusieron en juego diversas concepciones sobre cuestiones tales como el Estado y la democracia, entre otras. Por su parte, el inicio de la última década del siglo XX en Nicaragua estuvo caracterizado por la finalización del período de la Revolución Popular Sandinista a partir de la derrota del Frente Sandinista de Liberación Nacional en las elecciones de 1990. Desde ese momento, la burguesía nicaragüense -no sin contradicciones internas-, fue apuntalando el proyecto neoliberal a nivel local, desmantelando parte de los avances sociales de la década sandinista y otorgándole un determinado sentido a los procesos de “normalización” de las instituciones de la democracia representativa liberal y de “pacificación” del país centroamericano durante esos años. En este marco, el presente trabajo intentará analizar -a partir de fuentes bibliográficas y documentales- algunos puntos salientes del proceso de avance y consolidación del neoliberalismo en Nicaragua durante la década de 1990.

* Licenciado en Ciencia Política (UBA). Maestrando en Estudios Sociales Latinoamericanos (UBA)

: El proyecto hegemónico neoliberal en Nicaragua durante la década de 1990

1. Introducción

A pesar de que es posible rastrear sus orígenes en las décadas de 1970 y 1980, es durante los años de 1990 que a nivel latinoamericano se produce el afianzamiento del proyecto hegemónico neoliberal. Dicho proyecto encarnó en el impulso de determinadas políticas de reformas en el plano económico y social; al tiempo que se pusieron en juego diversas concepciones sobre cuestiones tales como el Estado y la democracia, entre otras.

Por su parte, el inicio de la última década del siglo XX en Nicaragua estuvo caracterizado por la finalización del período de la Revolución Popular Sandinista a partir de la derrota del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en las elecciones de 1990. Desde ese momento, la burguesía nicaragüense –no sin contradicciones a su interior–, fue apuntalando el proyecto neoliberal a nivel local, desmantelando parte de los avances sociales de la década sandinista y otorgándole un determinado sentido a los procesos de *normalización* de las instituciones de la democracia representativa liberal y de *pacificación* del país centroamericano durante esos años.

El presente trabajo parte de la consideración de que durante los primeros años de la década de 1990 se sentaron las bases para el desarrollo de un proyecto hegemónico en Nicaragua, el cual giraba en torno a las concepciones propias del neoliberalismo. En este marco –y en línea con los desarrollos teóricos de Gramsci sobre la hegemonía–, creemos útil partir de una concepción preliminar de la hegemonía concebida como “la capacidad de un grupo o sector social para lograr la aceptación de su dominación y dirección por parte de otros grupos o sectores”¹ (Balsa, 2006: 147). En este sentido, plantaremos el interrogante preliminar acerca de cuáles fueron los aspectos que pudieron haber favorecido la instauración de una articulación hegemónica específica en Nicaragua durante los noventa, basada en los lineamientos ideológicos y políticos del neoliberalismo.

Con dicho objetivo, comenzaremos con una breve descripción de la situación política y social en que se inscribió la salida del FSLN del gobierno en las elecciones de 1990, en un contexto que tiene sus orígenes en la década revolucionaria de los ochenta.

A continuación, esbozaremos una breve caracterización de los integrantes de la amplia coalición que llevó a la victoria electoral de la candidatura de Violeta Barrios de Chamorro, candidata de la Unión Nacional Opositora (UNO); así como de las políticas que llevó adelante durante su gobierno en el plano económico y social. Dichas políticas estuvieron guiadas por los postulados del neoliberalismo y fueron impulsadas por los organismos financieros internacionales.

Por último, retomaremos el interrogante inicial y dejaremos planteados otros tantos acerca de la Nicaragua de esos años, intentando apuntar a las condiciones que

¹ Cabe aclarar que las conceptualizaciones gramscianas sobre la hegemonía, así como el posterior derrotero de sus ideas y los debates que trajeron aparejadas, implican una gran cantidad de matices y opciones teórico-políticas. Por ejemplo, no profundizamos en este trabajo la relación de la hegemonía con las clases sociales y con el Estado, entre otros aspectos. Sin embargo, creemos que la definición provisional del concepto de hegemonía presentada es válida para el modesto objetivo planteado.

posibilitaron la instauración del proyecto neoliberal que, a lo largo de la década, tendería a erigirse como potencialmente hegemónico.

2. La coyuntura crítica de fines de los ochenta e inicios de los noventa en Nicaragua

La victoria de la UNO en las elecciones de 1990 supuso un vuelco en la dinámica política nicaragüense tal como se venía desarrollando desde la victoria de la insurrección encabezada por el sandinismo y mediante la cual se desterró a Anastasio Somoza Debayle del poder en 1979. La situación política, económica y social que dio marco al resultado electoral tiene gran parte de sus raíces en el período de la Revolución Popular Sandinista. En este sentido, se considera pertinente recorrer sucintamente algunos factores ciertamente relevantes que enmarcaron e influyeron en las características que asumió dicho escenario. Entre estos factores podemos mencionar el desarrollo de la guerra con *la Contra* y la política de los EEUU para la región; y la crisis económica nicaragüense de finales de la década del ochenta.

Respecto al primer punto señalado, vale remarcar que las hostilidades de los EEUU frente a la instauración del gobierno sandinista fueron incrementándose paulatinamente. Asimismo, Martí i Puig (2004: 187-190) señala que la llegada de Ronald Reagan a la presidencia en 1981 significó, por su parte, una nueva escalada en el nivel de agresión al gobernante FSLN. Además de su ataque al gobierno sandinista en otros planos -por ejemplo, el aislamiento diplomático o el bloqueo comercial-, una de las mayores apuestas de la administración Reagan fue el apoyo militar y económico a la oposición armada al sandinismo. Ésta, a la que se denominó como *la Contra*, estaba conformada por sectores ciertamente heterogéneos: campesinos y grupos indígenas inconformes con el rumbo de la revolución; sandinistas descontentos; entre otros. Sin embargo, en general coincidían en que la manera de enfrentar y doblegar al sandinismo en el poder era mediante el derrocamiento armado del gobierno revolucionario. Por su parte, la administración estadounidense enmarcaba ese apoyo no sólo en el plano estrictamente militar, sino que, por el contrario, éste se inscribía en el desarrollo de una estrategia de “guerra de baja intensidad” o “guerra total” (Martí i Puig, 2004: 191-197). La intención era la de apuntalar el deterioro de la posición dominante del FSLN en el escenario nicaragüense mediante el ataque constante a objetivos económicos, el desgaste político y el acoso comunicacional; así como la de lograr el deterioro moral de los sectores sandinistas o afines, mediante técnicas de la llamada “guerra psicológica”. Ideológicamente, se ponían en juego asuntos como la falta de libertad y democracia del régimen sandinista, pero también se incorporaban otras cuestiones como ciertos valores morales y, especialmente, la religión. En este marco, la jerarquía de la Iglesia Católica en general, y el Cardenal Obando en particular, se transformó en uno de los principales opositores al sandinismo.

Una cuestión adicional de la política de los EEUU para Centroamérica durante esos años se relaciona con la emergencia de un nuevo contexto internacional marcado por el derrumbe de la URSS y la emergencia de los EEUU como única superpotencia a nivel mundial. En el marco de la finalización de la Guerra Fría, la influencia estadounidense se transformó en omnipresente en todos los ámbitos internacionales. A pesar de que las relaciones de la URSS con Centroamérica durante la década de los ochenta había sido limitada -en términos de ayuda económica, intercambio comercial, asistencia militar,

etc.-, el cimbronazo que significó el paulatino desmoronamiento del campo socialista supuso un fuerte impacto en las izquierdas de todo el mundo. El desarrollo del capitalismo en su fase neoliberal ya estaba en marcha a nivel mundial desde hace algunos lustros, a lo que se ligó ideológicamente la necesidad de instauración de la democracia liberal, *formal*, como el horizonte político único para todas las naciones del mundo.

En particular, los conflictos armados en América Central -además del caso nicaragüense, en El Salvador y Guatemala- llevaban ya largos años y el deterioro económico y social que la guerra generaba se hizo insostenible para amplios sectores dirigentes de la región. Incluso, el propio gobierno estadounidense había ido dando pasos para darle impulso a los procesos de paz y de “democratización” de los países del istmo. Los sucesivos acuerdos regionales (como Esquipulas I y II), así como las negociaciones en curso a nivel nacional pero con participación de otros actores internacionales, dan cuenta de esta situación (Martí i Puig, 2006: 233-237). En general, en los países del istmo el impulso a las transiciones “controladas” se unió también con la necesidad de los regímenes autoritarios de legitimarse en el escenario internacional, dando lugar a las denominadas “democracias de fachada” o de “baja intensidad” (Torres Rivas, 2007: pp. 139-166).

Retomando el análisis referido a Nicaragua, frente a la prolongación del conflicto bélico, el FSLN fue aumentando los recursos destinados al presupuesto militar, alcanzando alrededor del 40 % del gasto total en 1987 (Vilas, 2004: 24). Asimismo, en el año 1983, el gobierno sandinista instauró el denominado Servicio Militar Patriótico (SMP), por el cual los jóvenes nicaragüenses debían enlistarse en el Ejército Popular Sandinista (EPS), que buscaba fortalecerse y, en alguna medida, profesionalizarse, en su enfrentamiento armado con *la Contra*.

Más allá de que durante el transcurso de la contienda bélica se demostró que los opositores armados del sandinismo no tenían la capacidad de lograr una victoria militar sobre el EPS, la situación de guerra permanente fue desmejorando fuertemente la situación social y económica de los nicaragüenses, además de ir limando apoyos internos al gobierno sandinista. Asimismo, la cuestión de la guerra y del SMP fue utilizada continuamente por la propaganda de la UNO durante la campaña electoral de 1990, alegando que con la continuidad del FSLN en el poder no había posibilidad de conseguir la paz.

En el marco anterior, la economía nicaragüense se fue deteriorando de manera creciente. En este sentido, Vilas afirma que “[e]l país reprodujo el patrón regional de recesión y crisis, pero con registros mucho más agudos, en la medida que a los factores estrictamente económicos se sumó la incidencia del conflicto político y militar” (2004: 21). Como muestra de esta tendencia -que podría ser complementada por otros datos económicos- podemos mencionar que el PBI nicaragüense durante el período 1981-1990 cayó alrededor del 17 % y el PBI *per capita* disminuyó en un 40% (Vilas, 2004: 148). Otro dato relevante que muestra la situación de crisis económica aguda, ya sobre el final de la década, son las altas tasas de inflación, las cuales incidían fuertemente sobre el nivel de vida de la población: el índice de precios al consumidor arrojó un incremento de 747,4 % en 1986, de 1.347 % en 1987 y de 33.602 % en 1988 (Vilas, 2004: 23). El escenario de crisis económica se expresaba además en la crónica escasez de divisas y el fuerte desabastecimiento de productos básicos. En definitiva, la histórica debilidad de la economía nicaragüense, en el contexto de guerra, no hizo más que profundizarse.

Adicionalmente, en el año 1988 las circunstancias extremas a que había llegado la crisis económica derivaron en que el gobierno sandinista buscara la estabilización macroeconómica mediante la implementación de un plan de ajuste fiscal que fue calificado por algunos actores como “draconiano” y de “operación quirúrgica sin anestesia” (*apud* Martí i Puig, 2006: 241). Mientras el objetivo gubernamental estaba fijado en lograr la baja de las tasas de inflación –lo que se logró en alguna medida–, por otro lado estas políticas tuvieron un impacto social perjudicial pero inevitable en el marco del plan de ajuste. Por ejemplo, hacia el final de la década se fue produciendo un aumento concomitante de las tasas de desocupación, con el consiguiente deterioro en otros indicadores sociales.

En definitiva, el crítico y creciente deterioro social de los nicaragüenses no hizo más que limar apoyos al gobierno sandinista, deteriorando asimismo su legitimidad política. Por su parte, esta situación fue utilizada –al igual que la cuestión de la guerra que mencionábamos anteriormente– por la UNO durante la campaña presidencial, fomentando adicionalmente la idea de que con la llegada de Violeta Chamorro a la presidencia los EEUU brindarían el apoyo económico necesario para la superación de la crisis económica.

3. La coalición contrarrevolucionaria: del antisandinismo al neoliberalismo

Sin embargo, a pesar del escenario descrito anteriormente, la victoria del FSLN en los comicios de 1990 parecía segura. Prácticamente todas las encuestas electorales daban por ganador a Daniel Ortega, no dejando lugar a dudas de ese resultado. Incluso funcionarios extranjeros y editorialistas estadounidenses preveían la necesidad de una negociación del gobierno de los Estados Unidos con el gobierno sandinista, una vez que este fuera ratificado en las urnas, con el objetivo de “normalizar” las relaciones entre ambos países (*apud* Martí i Puig, 2009: pp. 39-40).

Por su parte, la UNO no parecía lo suficientemente consistente como para concretar la victoria. En primer lugar, esta coalición electoral no constituía un bloque sólido y homogéneo. Se conformó como una variopinta constelación de catorce partidos políticos que cubrían todo el espectro ideológico de derecha a izquierda; y entre sus integrantes se encontraban organizaciones de tendencia liberal, conservadora, socialcristiana, socialista. Asimismo, apunta Eeuwen que a pesar de la gran cantidad de organizaciones políticas presentes en dicha alianza, al momento de su constitución, la mayoría se trataba de agrupaciones que eran “recientes y pequeñas, y [carecían] de una verdadera base electoral” (Eeuwen, 1994: 207). La excepción estaba dada por el Partido Liberal Independiente, dirigido por Virgilio Godoy, quien fue integrante de la fórmula presidencial como candidato a vicepresidente². Sin embargo, entre sus apoyos se encontraban los diferentes agrupamientos que se habían opuesto al accionar del gobierno sandinista a lo largo de la década de los ochenta: sectores empresariales, de la jerarquía eclesiástica, de la Contra, etc. Adicionalmente, contaban con el apoyo del

² Van Eeuwen (1994) señala que Godoy tenía la pretensión de ser candidato a presidente, pero la influencia de la embajada estadounidense hizo que la designada para ese puesto haya sido Violeta Chamorro. Quien también tenía la esperanza de ocupar ese puesto en la lista era el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Enrique Bolaños. Poco más de una década más tarde, en las elecciones de 2001, Bolaños sería elegido presidente como candidato del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

Departamento de Estado de los EEUU, apoyo que consistió no sólo en cuantiosas sumas de dinero necesarias para la campaña sino en un fuerte embate propagandístico a favor de la candidatura de Chamorro y en contra de la continuidad del FSLN en el poder. Con este panorama, que da cuenta de la diversidad existente de grupos y sectores que giraban en torno a la UNO, no sorprende que desde la inicio mismo de la campaña electoral se distinguieran diferencias entre los diversos componentes que la componían. Sin embargo, fue el *antisandinismo* lo que funcionó como factor aglutinante de esta alianza electoral y lo que, al mismo tiempo, posibilitó la convergencia de tan diversos sectores y organizaciones (Martí i Puig, 2006: 233-239).

Por lo demás, luego de la victoria se diferenciaron más claramente al interior del gobierno al menos dos sectores. Por un lado, el grupo más “duro” contra el sandinismo y su legado, liderado por el vicepresidente Godoy, al que se sumaban los sectores ligados al somocismo y a la comunidad cubana de Miami –incluyendo al por entonces alcalde de Managua y posteriormente presidente, Arnoldo Alemán. Por otro, los funcionarios más cercanos a Violeta Chamorro –entre los que se incluía el ministro Antonio Lacayo, entre otros asesores presidenciales–, con mayor tendencia a dialogar con el FSLN en pos de una transición “ordenada” y pacífica. Sin embargo, esta diferenciación no implicaba conflictos en torno a lo fundamental del rumbo que se creía que debía tomar el proceso político nicaragüense. En este sentido, e un artículo publicado durante esos años, señala Vilas que “[l]as diferencias dentro del nuevo gobierno [...] se refieren más a estilos y modalidades de acción que a los alcances o el contenido del programa”. Sin embargo, cuando esas diferencias salían a la superficie y podían limitar alguna política del gobierno, Violeta Chamorro recurrió a “las amplias facultades presidenciales reconocidas por la constitución política de 1987 –aprobada por el sandinismo– cada vez que podía preverse la existencia de resistencias o diferencias de criterio dentro de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional que pudieran amenazar su mayoría absoluta” (Vilas, 1990: 42).

Desde el inicio de su gestión, el nuevo gobierno puso en marcha un paquete de medidas –que algunos han calificado de “revanchista” – que afectaron fundamentalmente a los sectores populares beneficiados por el proceso revolucionario. En este sentido, ya desde las primeras resoluciones del gobierno de Chamorro se podía percibir el objetivo de desmontar los lineamientos económicos y sociales puestos en marcha por la Revolución Popular Sandinista que aún se mantenían vigentes. Por ejemplo, los Decretos 10/90 y 11/90, de mayo de 1990, disponían el marco legal para proceder a la desarticulación de la reforma agraria y a la desaparición del Área de Propiedad del Pueblo (APP)³. En este sentido, afirma Vilas que el fuerte embate a las conquistas de la década revolucionaria y la efectividad en su progresiva desestructuración demostró, por una parte, la fragilidad de las instituciones que aseguraban los derechos y los avances que favorecían a los sectores populares; y por otro, la intención del nuevo gobierno de “poner a Nicaragua en las condiciones en que se habría encontrado en 1978 si Anastasio Somoza hubiera aceptado las presiones de Estados Unidos y se hubiera marchado: un ‘somocismo sin Somoza’ en su acepción más literal y restrictiva”. Y agrega: [e]l programa del nuevo gobierno –no el que abonó su campaña electoral sino el que está ejecutando efectivamente– es de contenido y alcance contrarrevolucionario, en el sentido literal de ir contra las realizaciones de la revolución” (Vilas, 1990: 42).

³ El Área de Propiedad del Pueblo estaba conformada principalmente por las tierras que anteriormente pertenecían a Somoza y sus allegados, estatizadas luego del triunfo de la insurrección sandinista en 1979.

En este marco, a poco más de un año de su llegada al gobierno, Chamorro acordó el primer programa “stand by” con el FMI. En un contexto de caída continua del PBI, luego de largos años de guerra y bloqueo económico, las directivas del organismo internacional se concentraron en “imponer drásticos programas ‘estándar’ de estabilización y ajuste, procurando alcanzar a toda costa déficit fiscales mínimos a corto plazo, en condiciones en que los ingresos fiscales eran extremadamente reducidos, mientras priorizaba el uso de los limitados recursos para llevar a cabo el pago ‘a toda costa’ del servicio de la deuda externa, el cual llegó a absorber en promedio el 51% de los ingresos fiscales” (Acevedo Vogl: 2008). En un sentido similar, afirma Oscar-René Vargas que el gobierno de Chamorro “estaba interesada en la estabilización económica, pero especialmente en impulsar cambios en la economía y el Estado, revertir acciones y transformaciones de la década revolucionaria e iniciar un rápido proceso de liberalización económica conforme las líneas generales y el modelo establecido por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional” (Vargas, 2005: 10).

Siguiendo los linamientos clásicos del denominado “Consenso de Washington”, el FMI impulsó la privatización de empresas públicas, así como la desregulación y apertura de los mercados. Según Vargas, la perspectiva dominante en el nuevo gobierno “otorgó prioridad al logro de equilibrios macroeconómicos, asignó al mercado un papel crucial en la activación de la economía y en la distribución de los recursos disponibles. La empresa privada fue señalada como el motor del crecimiento económico, limitando el papel del Estado en la esfera productiva y de servicios, reservándole el de facilitador de la iniciativa económica privada y promotor de la plena integración de Nicaragua en el mercado mundial”. Por lo demás, agrega Vargas que el “cambio de administración en 1997 no [implicó] cambios substanciales en la política económica. En 1998, el Gobierno suscribió el segundo programa de Servicio Financiero Reforzado de Ajuste Estructural (ESAF, por sus siglas en inglés) para Nicaragua [...]. La política monetaria, cambiaria y fiscal han sido los instrumentos utilizados para reducir la inflación y sanear las cifras macroeconómicas” (Vargas. 2005: 10).

Acevedo Vogl (2008) realiza un rápido repaso de las “condicionalidades” del FMI para la suscripción de los sucesivos acuerdos con el gobierno nicaragüense. En primer lugar, se impuso la desregulación y liberalización de los mercados, lo cual se tradujo en la creciente concentración del crédito en el comercio y el consumo, dejando a las pequeñas y medianas industrias sin acceso a los recursos necesarios para competir en un mercado en el que otros países iban teniendo mayor participación. Al mismo tiempo, se puso especial énfasis en la privatización de las empresas de servicios públicos, como las ligadas a la generación eléctrica y las telecomunicaciones, muchas veces en condiciones desventajosas y a precio de remate⁴. Otro exponente de esta tendencia fue el énfasis puesto en la reducción del empleo y la baja de los salarios del sector público. La efectividad de estas políticas determinó que la partida destinada a salarios pasara de representar el 30 % del presupuesto estatal en 1992 a significar el 17% en 1997; a lo que se suma la disminución del salario promedio de los trabajadores del sector público en relación al salario promedio nacional, siendo dicha relación equivalente al 74 % en 1992 y de sólo 54% en 1997. En definitiva, del listado de las “condicionalidades” del

⁴ Por ejemplo, el 51% del paquete accionario de la empresa de comunicaciones ENITEL fue otorgado a cambio del pago de 11 US\$ millones al año, al tiempo que se le aseguraba al comprador el cobro de 10 US\$ millones anuales de las utilidades de la empresa por hacerse cargo de la administración. Por lo tanto, la compra de ENITEL fue realizada a partir de sus propias utilidades. Por lo demás, el Estado –dueño del 49% restante de ENITEL– no percibió ningún monto en concepto de utilidades (Acevedo Vogl, 2008).

FMI para la firma de los sucesivos acuerdos resalta “el énfasis en la reducción del empleo estatal y el congelamiento nominal de los salarios de los empleados estatales [...]; la introducción de cobros en los servicios sociales; el ajuste de la tarifa de los servicios públicos [...]; y la insistencia en la privatización de las empresas del sector de energía y telecomunicaciones, y finalmente, del propio sistema de seguridad social” (Acevedo Vogl, 2008).

Las consecuencias sociales de la implementación de estas políticas no han dejado de ser terribles para los sectores populares. En un balance del legado de los gobiernos neoliberales, Vargas afirma que

La sociedad nicaragüense ha experimentado profundos cambios en los últimos años. Se produjo un brusco descenso en la calidad de vida de las clases medias vinculadas al empleo público y privado; procesos de movilidad ascendentes en algunos sectores de los pequeños y medianos comerciantes; disminución de los trabajadores asalariados con la consiguiente pérdida de influencia de los sindicatos en el escenario de la política nacional; surgimiento de un nuevo tipo de funcionario con altos niveles de ingresos pero con una formación profesional media; élites empresariales que tratan de adaptarse con variado éxito a las nuevas reglas de la política económica delineadas por el FMI y el BM; difusión masiva de valores vinculados al consumo y acceso muy diferenciado a ellos (Vargas, 2005: 18).

Y agrega que

La política neoliberal ha consolidado un marcado proceso de diferenciación social. Mientras un grupo social minoritario ha conseguido cierto éxito en sus actividades económicas, otros tratan con suerte diversa de alcanzar el mínimo para la sobrevivencia de su grupo familiar, la gran mayoría de ellos son empujado a la marginación. En el campo y en las ciudades se incrementan las extensas zonas de pobreza extrema y pobreza. La pobreza prevalece más en el área rural, ya que nueve de cada diez habitantes es pobre (Vargas, 2005: 18).

En definitiva, el breve resumen de las políticas adoptadas no dejan dudas de una clara orientación acerca de hacia dónde se concebía que debían apuntar las políticas gubernamentales con el objetivo de dejar atrás la crisis económica de inicios de la década. Los resultados no fueron disímiles, en lo fundamental, a lo ocurrido en el resto de América Latina, donde las políticas neoliberales siguieron un derrotero similar al mencionado para el caso nicaragüense.

Consideraciones finales y nuevos interrogantes

Al inicio de este trabajo se tomaba como válida la hipótesis según la cual durante la década de 1990 se desarrolló una hegemonía de sesgo neoliberal en Nicaragua. Frente a esta aseveración, uno de los interrogantes que aparecía como posible de ser planteado es aquel que se pregunta acerca de cómo fue posible que los sectores populares hayan admitido el avance de políticas claramente en contra de sus intereses –en un marco de fuerte deterioro económico y social–; y sin lograr, en definitiva, ponerle un freno a dichas políticas.

En este marco, decíamos que la hegemonía requiere de la “aceptación” de las clases subalternas de la dominación a la que son sometidas. Sin embargo, esa aceptación no implica, por lo demás, que la misma sea “voluntaria”. En este sentido, Balsa afirma que “[l]a idea de aceptación implica algún plano de conducta ‘voluntaria’, en el sentido de

diferenciarla de conductas determinadas sólo ‘por coerción’. Sin embargo, se debe tener cuidado con sobrevalorar el carácter ‘voluntario’ de la adhesión a determinadas ideologías. La ‘voluntad’ es socialmente construida, por múltiples procesos de socialización que nos enseñan lo que ‘debemos’ querer. Y en estos procesos de socialización no está ausente la coacción” (Balsa, 2006: 148-149). Aunque más no sea como amenaza, la coacción está presente. Asimismo, es posible pensar dicho proceso como análogo a lo que puede suceder en el plano social. Por ejemplo, la inscripción en la memoria social de las dictaduras militares, así como la difusión en las últimas décadas en América Latina de los “golpes de mercado” –con menor grado de violencia física pero no por eso con menor efectividad–, agrega Balsa que no dejan de ser “recordaciones de que existen límites objetivos para los sueños de nuestras voluntades de salir de la sociedad capitalista” (Balsa, 2006: 149)⁵.

En definitiva, el aspecto que nos parece relevante mencionar es el papel que jugó la crisis económica de fines de la década de los ochenta –así como, de una manera similar aunque no idéntica, la posibilidad de prolongación de la guerra civil– en el disciplinamiento social y la posibilidad del desarrollo de políticas de carácter neoliberal en Nicaragua a principios de los noventa. La amenaza de la profundización de la crisis económica y de la continuidad del conflicto bélico no sólo puede intuirse que constituyó un factor importante en la derrota electoral del sandinismo en las elecciones de 1990, sino que además sentó las bases para la posterior consolidación de una hegemonía que adquirió características diferenciales a partir de su estructuración en torno a los lineamientos ideológicos del neoliberalismo.

De lo anterior pueden desprenderse varios interrogantes, de los cuales procederemos a mencionar sólo algunos. El primero que creemos relevante mencionar es el que se refiere a cómo influyó el proceso descrito en el tipo de democracia que se fue desarrollando en Nicaragua desde esos años. En esta línea, afirma Aguilar Sánchez –entre otras sugerentes aseveraciones– que “al tomar como referencia los planes de estabilización y sus relaciones con el proceso de democratización en Nicaragua la característica central que descubrimos es el tránsito inducido a la democracia restrictiva con contexto hiperinflacionario, en donde este factor juega un papel clave en la legitimación de las disposiciones económicas adoptadas por los grupos ligados al poder político en el país y fuera de él” (Aguilar Sánchez, 2000: 21).

Otra cuestión relacionada que creemos válida profundizar se refiere al papel desempeñado por el sandinismo en esa coyuntura crítica de principios de los noventa. La derrota en las elecciones, inesperadas para la mayoría de los nicaragüenses, dio lugar a un reacomodo del papel del FSLN en el escenario político Nicaragua. Por primera vez en su historia los sandinistas pasaron a ser un partido de oposición “institucional”, con cargos en el parlamento y otros estamentos estatales pero, a diferencia de la década del 80, sin conducir el gobierno nacional. Siguiendo a Vilas (1991), es posible señalar que al interior del FSLN una principal consecuencia de la derrota electoral fue el inicio de un proceso de reconfiguración de las tendencias internas y de debate sobre la

⁵ En un sentido similar, para el caso argentino Bonnet (2008) plantea que lo que generó las condiciones de posibilidad para la articulación hegemónica “neoconservadora” de los noventa estuvo en gran medida signado por el mecanismo coercitivo de la violencia dineraria que significaron las hiperinflaciones de los años 1989 y 1990. “La hiperinflación es entonces, en el más riguroso sentido de la palabra, ese *caos* que puede operar como contracara de un *orden* hegemónico. Es *caos* en el sentido estricto de una desarticulación de las relaciones sociales mismas y puede operar como contracara de un *orden* hegemónico en el sentido de una rearticulación de esas mismas relaciones sociales” (Bonnet, 2008: 192).

orientación política a adoptar en el nuevo escenario. En dichas circunstancias, debatido en sus problemas internos, el FSLN⁶ no pudo ser la expresión de un bloque social que se opusiera frontalmente a las políticas gubernamentales. Incluso, muchos de los sandinistas tendieron a “aceptar” como inevitables los cambios producidos a nivel mundial, en un entorno signado por la desintegración de la URSS y la consolidación de la posición de los EEUU en el escenario internacional. En dicho marco, se puede intuir que se consideró, al menos para ciertos sectores sandinistas, como inevitable el despliegue del capitalismo en su versión neoliberal; a lo cual estaba ligado determinado tipo de estado y de “democracia”, además de determinados valores sociales.

Finalmente, creemos que otro punto sobre el que se podría avanzar en el análisis es el que se refiere a las resistencias populares al avance neoliberal. En este sentido, es importante resaltar que existieron numerosos movimientos de resistencia a las políticas de corte neoliberal de los diferentes gobiernos durante los noventa⁷. Por caso, tan tempranamente como en mayo de 1990 había comenzado a extenderse un movimiento huelguístico, Sin embargo, a pesar de la experiencia acumulada durante la década de los ochenta, en un marco de fuerte participación popular, estos movimientos no tuvieron la capacidad de torcer el rumbo de la política gubernamental.

⁶ Creemos que el análisis del papel jugado por el FSLN durante el avance de las políticas neoliberales no debería dejar de lado un examen del sandinismo durante el período revolucionario. Algunos analistas incluso han planteado que el neoliberalismo en Nicaragua comenzó con el giro en la política económica dado por el FSLN en 1988 mencionado anteriormente. Adicionalmente, en una primera aproximación podría resultar paradójico que el andamiaje institucional en que se apoyó el desarrollo del neoliberalismo haya sido el erigido por el sandinismo, plasmado en la Constitución de 1987. De manera similar, consideramos que el análisis del tópico referido al tipo de democracia desarrollado durante los noventa debería tener en cuenta este hecho.

⁷ Un ejemplo paradigmático de la resistencia al neoliberalismo estuvo dado por la lucha “por el 6%”, desarrollada a lo largo de la década de 1990. La consigna de “el 6%” hace referencia a la obligación constitucional de otorgar dicho porcentaje del presupuesto nacional a las universidades, lo cual fue retaceado, de diferentes maneras, por los gobiernos de turno. Sobre este conflicto en particular, ver Fernández Hellmud y Romero Wilner (2012).

Bibliografía

Acevedo Vogl, Adolfo José 2008 “1991-2007 5 acuerdos con el FMI: 16 años perdidos” en *Envío* (Managua) N° 313. Disponible en <http://www.envio.org.ni/articulo/3737>

Aguilar Sánchez, Carlos 2000 “Los procesos de democratización bajo esquema neoliberal. El caso de Nicaragua”, Informe final del concurso: Democracia, derechos sociales y equidad; y Estado, política y conflictos sociales, Programa Regional de Becas CLACSO. Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/1999/asanchez.pdf>

Balsa, Javier 2006 “Notas para una definición de la hegemonía” en *Nuevo Topo. Revista de historia y pensamiento crítico* (Buenos Aires) N°3.

Bonnet, Alberto 2008 *La hegemonía menemista. El neoconservadurismo en Argentina, 1989-2001* (Buenos Aires: Prometeo Libros).

Euwen, Daniel van 1994 “Nicaragua”, en Rouquié, Alain (coord.) *Las fuerzas políticas en América Central* (México: Fondo de Cultura Económica).

Fernández Hellmud, Paula D. y Romero Wilner, Fernando G. 2012 “Nicaragua y los años de 1990. Las luchas por el 6% del presupuesto y la Autonomía Universitaria” en Fernández Hellmud, Paula D. (comp.) *Nicaragua: problemas, estudios y debates de la historia reciente, 1979-2011* (Bahía Blanca: Ediciones del CEISO / CEALC).

Martí i Puig, Salvador 2004 *Tiranías, rebeliones y democracia. Itinerarios políticos comparados en Centroamérica* (Barcelona: Edicions Belaterra).

Martí i Puig, Salvador 2009 “El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 1980-2006. Análisis de una mutación” en Martí i Puig, Salvador y Close, David (editores) *Nicaragua y el FSLN [1979-2009]. ¿Qué queda de la revolución?* (Barcelona Edicions Belaterra).

Torres Rivas, Edelberto 2007 *La piel de Centroamérica* (Guatemala: FLACSO)

Vargas, Oscar-René 2005 “Nicaragua: la incertidumbre y el futuro” en Serrano Caldera, Alejandro (comp.) *La democracia y sus desafíos en Nicaragua* (Managua: CIELAC / Fundación Friedrich Ebert). Disponible en <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/cielac/caldera.pdf>

Vilas, Carlos 1990 “Nicaragua después de las elecciones: los primeros sesenta días” en *Política y Sociedad* (Madrid) N°6/7.

Vilas, Carlos 1991 “El debate interno sandinista” en *Nueva Sociedad* (Caracas) N° 113.

Vilas, Carlos 2004 *El legado de una década* (Managua: Lea Grupo Editorial).